
Entre Bruselas y Hong Kong

Josep Borrell

Mientras escribo estas líneas acaba el Consejo Europeo de Bruselas y la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong vive sus últimas y agitadas horas.

Antes de acudir a Bruselas, Blair pasó por Estrasburgo, donde todos los presidentes de los grupos políticos europeos rechazaron su propuesta de Perspectivas Financieras (PF).

Pocas horas después iniciaba la reunión del Consejo transmitiendo esta rara unanimidad a sus 25 miembros (28 con la Comisión, más Rumania y Bulgaria como observadores) y recordándoles que las PF necesitan el acuerdo del PE.

El compromiso final sigue estando lejos de las propuestas del PE. Veremos lo que da de sí la negociación interinstitucional. El PE tiene una ocasión de hacer valer los poderes que le conceden los tratados y afirmar su personalidad política, pero para ello los eurodiputados tienen que demostrar su autonomía con respecto a los gobiernos.

Tiempo habrá de valorar las PF aprobadas hoy por el Consejo y las que finalmente se acuerden con el PE. Pero la coincidencia de los acontecimientos de Bruselas y Hong Kong merece una reflexión sobre el futuro de la agricultura europea, que ha sido uno de los grandes protagonistas en ambas reuniones.

En efecto, la reunión de Hong Kong marca un momento crucial del Programa de Doha para el Desarrollo, lanzado en la capital de Qatar en noviembre del 2001.

Su objetivo es reducir las barreras comerciales en un buen número de sectores, especialmente en materia agrícola, para impulsar el desarrollo de los países más pobres.

Aunque hay importantes desacuerdos en sectores industriales y servicios, la agricultura es el capítulo que ha desatado más controversias en relación con el futuro de la Política Agraria Común (PAC).

En Bruselas parecía que el único problema de las PF era el combate entre la PAC y el “cheque” británico, Blair negándose a reducirlo mientras Francia no aceptara revisarla profundamente.

Pero la revisión de la aportación del Reino Unido al presupuesto comunitario viene impuesta por las consecuencias de la ampliación y así se ha hecho, en parte. El compromiso final deja las espadas en alto para la agricultura, pero introduce recortes substanciales para las políticas de desarrollo rural.

Si la agricultura aparecía en Bruselas como un obstáculo estructural al acuerdo presupuestario, en Hong Kong Europa aparecía como la gran acusada por el efecto negativo de sus políticas agrícolas sobre el desarrollo.

Se argumenta que Europa debe reformarla, reduciendo las subvenciones y ayudas a la exportación que distorsionan los mercados mundiales, y recortando significativamente las barreras a las importaciones.

Ello abriría nuevas posibilidades a los países pobres del Sur, mayoritariamente productores de bienes agrícolas. No hay que olvidar que dos de cada tres personas que padecen pobreza extrema viven en el medio rural.

Ello permitiría también disminuir los precios de los productos agrícolas, en beneficio de los consumidores de los países industrializados.

También los aspectos redistributivos de la PAC deben ser revisados, porque concentra las ayudas en las compañías y terratenientes más ricos de Europa. En el caso español, según informes de Intermon-Oxfam, el 18% de los perceptores —los más grandes— concentran el 76% de las ayudas.

El análisis de los beneficiarios de la PAC en el Reino Unido, situando a la aristocracia británica entre los primeros de ellos, es también relevante y estos días se ha utilizado profusamente en Bruselas.

Pero en mi discurso introductorio a las deliberaciones del Consejo en Bruselas pedí que las críticas a la PAC fueran más matizadas y no fueran el reflejo mecánico de la ideología que ve en la liberalización comercial el remedio a todos los males.

Pero si bien es cierto que la agricultura europea depende en gran medida de las ayudas de la PAC, plantearía importantes problemas al continente europeo.

La agricultura no es una actividad como las demás. Tiene una “multifuncionalidad” que le hace generar utilidades que van más allá del beneficio económico.

La PAC no sólo es una transferencia económica a la población que trabaja en ella, también ayuda al mantenimiento de la cohesión territorial, al equilibrio ecológico y al sostenimiento de los ecosistemas europeos. Tener una política agrícola en Europa garantiza también seguridad y autosuficiencia alimentaria.

Y, por otra parte, es preciso tener en cuenta que hay países y países en desarrollo. Todos no están en la misma situación y por tanto no se beneficiarían igual de una liberalización de los mercados. Por ello, todos los estudios serios, europeos y americanos, dicen, aunque no se les cite demasiado, que es imposible cifrar el beneficio de una liberalización de los mercados agrícolas porque las cifras dependen de la situación de los países en desarrollo que, además, se protegen fuertemente entre ellos.

La realidad es que la protección de la agricultura europea está matizada por una serie de regímenes preferenciales que permiten a los países menos desarrollados un acceso privilegiado a nuestros mercados.

Una liberalización total beneficiaría a las grandes potencias agrícolas del mundo (Brasil, Argentina, etc.) y a las multinacionales que controlan los mercados agrícolas mundiales, y mucho menos a los países más pobres, africanos en su mayoría.

Sería una situación similar a la producida en el sector textil, donde la total liberalización del comercio mundial ha conducido a un *boom* de las importaciones chinas, pero ha ocasionado graves perjuicios en países como Túnez y Marruecos.

La paradoja es que la política agrícola europea protege a la vez a los grandes productores europeos y a los países menos desarrollados.

Entonces, ¿qué hay que hacer? El mantenimiento del *statu quo* es imposible, pero hay márgenes para la necesaria negociación. Aunque no a costa de la desaparición del campo y de la agricultura en Europa.

Los europeos debemos dejar de jugar a la defensiva, dando una imagen de eternos egoístas que cierran fronteras a un “comercio justo” mundial.

Si para Europa la agricultura es una preferencia colectiva, debe defenderla de manera transparente y explicar a sus ciudadanos los costes de su abandono. “Teruel también existe”, dirían algunos.

La liberalización de los intercambios es, en general, un bien. Pero ella sola no aportará el desarrollo, como nos lo acaban de recordar desde Hong Kong tanto P. Lamy como el comisario Mandelson.

El verdadero debate no es la liberalización de la agricultura a toda costa, sino sobre una verdadera política de desarrollo a nivel mundial.
